

CRISIS DEL ESTADO Y PODER POPULAR

Tres factores definen el funcionamiento, la estabilidad y la capacidad representativa de un Estado. El primero es el marco general de fuerzas sociales: la correlación entre las diferentes coaliciones, dominantes y subordinadas, que se disputan la reconfiguración de lo que Bourdieu llamaba el «capital estatal», esto es, la capacidad para influir sobre las decisiones en cuestiones de interés común. En segundo lugar está el sistema de instituciones y normas políticas que arbitran la coexistencia de fuerzas sociales jerarquizadas. De hecho, este marco institucional es una materialización de la correlación de fuerzas fundacional que da lugar a un régimen estatal particular y de los medios por los que se reproduce legalmente. En tercer lugar, cada Estado depende de una estructura de categorías de percepción comunes, una serie de creencias movilizadoras que generan cierto grado de conformidad social y moral entre gobernantes y gobernados y que cobra forma material en el repertorio cultural y los rituales del Estado.

Cuando esos tres componentes de la vida política de un país son notoriamente sanos y operativos, podemos hablar de una correspondencia óptima entre régimen estatal y sociedad. Cuando esos factores se ven suspendidos o resquebrajados nos hallamos ante una crisis del Estado, manifestada en el antagonismo entre el mundo político y sus instituciones, por un lado, y las acciones opuestas de coaliciones sociales de gran alcance, por otro. Esto es precisamente lo que ha venido sucediendo en Bolivia en los últimos años. Los sucesivos levantamientos y sublevaciones populares que han sacudido el país desde 2000 pueden entenderse sobre todo como síntomas de una profunda crisis del Estado.

Esta crisis tiene un doble carácter: a corto plazo, es una crisis del modelo neoliberal y de la base social e ideológica sobre la que se ha construido en Bolivia. Pero también es, parafraseando a Braudel, una crisis de la *longue durée*: una crisis institucional e ideológica del Estado republicano basado desde su fundación en una relación colonial con la mayoría indígena del pueblo boliviano. Examinemos cómo se manifiestan actualmente en Bolivia estos aspectos en los ámbitos social, institucional e ideológico.

Marco de las fuerzas sociales

El punto de partida para el análisis del equilibrio de fuerzas sociales en Bolivia desde mediados de la década de 1980 es la derrota política y cultural del movimiento obrero organizado en la COB¹. Tras la revolución popular de 1952-1953 y durante décadas, ésta había articulado las necesidades de un amplio frente de franjas obreras urbanas y rurales, representando las reivindicaciones populares con respecto a la administración del excedente social, mediante estructuras como la afiliación sindical y la cogestión obrera. Tras la dispersión de ese movimiento obrero se consolidó un bloque social consistente en fracciones empresariales conectadas con el mercado mundial, partidos políticos de elite, inversores extranjeros e instituciones reguladoras internacionales, que ocupó el centro de la escena en la definición de la política pública. Durante los siguientes quince años esas fuerzas se convirtieron en sujetos únicos de la toma de decisiones y en protagonistas de la iniciativa en la Administración pública, reconfigurando la organización económica y social del país con la promesa de la modernización y la globalización: reformas estructurales de primera y segunda generación, privatizaciones, descentralización, reducción de impuestos, etc.

Desde el inicio del nuevo milenio esta relación de fuerzas se ha visto desafiada desde abajo y el acendrado elitismo del «Estado neoliberal-patrimonial» se ha puesto en cuestión cuando nuevas formas de organización y politización han invertido la situación de las clases subalternas. Las protestas y bloqueos de carreteras de abril y septiembre de 2000, julio de 2001 y junio de 2002 marcaron la reconstitución regional de movimientos sociales capaces de imponer medidas políticas, regímenes legales e incluso modificaciones de la distribución del excedente social gracias a la fuerza de sus movilizaciones². Leyes como la número 2029, que pretendía redefinir la propiedad de las aguas, y las que posibilitaban la venta de empresas

¹ Central Obrera Boliviana: organización de trabajadores de las grandes empresas en diferentes ramas de la producción. A raíz de la flexibilización de plantillas, los cierres de empresas y las privatizaciones realizados desde 1985, su base social se ha visto reducida a los profesores, empleados de la sanidad pública, estudiantes universitarios y algunos gremios urbanos. Su secretario ejecutivo es Jaime Solares.

² En 2000 un aumento del precio del agua en el departamento de Cochabamba tras la privatización del servicio de abastecimiento provocó protestas masivas, con huelgas y bloqueos de carreteras que paralizaron la ciudad. El 4 de abril unos 100.000 huelguistas y manifestantes rompieron el cordón militar que rodeaba la plaza central de la ciudad y mantuvieron una asamblea masiva al aire libre. El 8 de abril el gobierno de Banzer revocó el contrato sobre abastecimiento de agua con Aguas del Tunari. Por aquella misma época se produjeron movilizaciones de los cocaleros y campesinos contra la amenaza de erradicación de la coca, en las que desempeñaron un papel dirigente organizaciones del pueblo indígena disponiendo bloqueos de carreteras que amenazaban privar de alimentos a La Paz. En junio de 2001 los cocaleros de los valles de los Yungas consiguieron expulsar a la fuerza de erradicación boliviano-estadounidense. Dos meses después Banzer cedió la presidencia al vicepresidente Quiroga [N. de la NLR.]

del Estado a manos privadas, aumentos de impuestos, etc., fueron anuladas o modificadas bajo la presión de los movimientos sociales y los levantamientos populares. Decretos presidenciales como el que imponía el cierre del mercado de coca o la prohibición de su cultivo en los Yungas tuvieron que ser retirados por la misma razón. La legislación financiera fue enmendada en línea con las demandas nacionales de grupos populares organizados (comunidades indígenas, jubilados, cultivadores de coca, cooperativas mineras, policías) que demostraban el surgimiento de bloques sociales, los cuales, al margen del Parlamento o con apoyo desde éste –tras el éxito del MAS en 2002–, contaban con fuerza suficiente para bloquear la puesta en práctica de los planes gubernamentales e imponer la redistribución de los recursos públicos por medios no parlamentarios.

El aspecto más importante de estos agrupamientos populares, hasta entonces excluidos de la toma de decisiones, es que las reivindicaciones que planteaban pretendían modificar inmediatamente las relaciones económicas, por lo que su reconocimiento como fuerza política colectiva implicaba necesariamente una transformación radical de la forma dominante de Estado, basada en la marginación y atomización de las clases trabajadoras urbanas y rurales. Además –y éste es un aspecto crucial de la reconfiguración actual–, los líderes de esas nuevas fuerzas son predominantemente indígenas y sostienen un proyecto político y cultural específico propio. A diferencia del periodo iniciado en la década de 1930, cuando los movimientos sociales se articulaban en torno a un sindicalismo obrero que mantenía el ideal del mestizaje y era el resultado de una modernización económica protagonizada e impulsada por elites empresariales, hoy día los movimientos sociales con mayor poder para cuestionar el orden político tienen una base social indígena y se asientan en las zonas agrarias excluidas o marginadas por el proceso de modernización económica. Los aimaras del altiplano, los cocaleros de los Yungas y el Chapare, los *ayllus*³ de Potosí y Sucre y los pueblos indios del Este han sustituido como protagonistas sociales a los sindicatos y organizaciones populares urbanas. Y pese al carácter regional o local de sus acciones, comparten una matriz identitaria indígena que pone en cuestión lo que ha sido el núcleo invariable del Estado boliviano durante 178 años: su mononacionalidad.

Además, la coalición de las elites da señales de fatiga y conflicto interno. El programa económico de los últimos veinte años –privatización de las empresas públicas, externalización de los beneficios, erradicación de la coca– ha dado lugar a una disminución de las oportunidades para deter-

³ El *ayllu* fue la base y el núcleo de la organización social del Imperio incaico. La palabra «ayllu», de origen quechua y aimara, significa comunidad, linaje, casta, parentesco. Puede definirse como el conjunto de descendientes de un antepasado común, real o supuesto, que trabajan la tierra de forma colectiva y con un espíritu solidario. El *ayllu* viene a ser así una asociación cuyos miembros están unidos por un vínculo consanguíneo (real o ficticio), religioso, territorial y económico [N. del T.].

minadas secciones de la burguesía nacional, exacerbada por la contracción de los recursos tributarios del Estado debido al crecimiento del sector informal. Al ensombrecerse sus perspectivas a largo plazo, las distintas fracciones de la elite comenzaron a distanciarse, enfrentándose por la reducción de beneficios transferidos al Estado, la negativa de los refinadores extranjeros a modificar el precio de compra del petróleo, la renegociación con Brasil del precio del gas⁴, los impuestos sobre la propiedad de la tierra, etc. Su proyecto compartido durante la última década está finiquitado.

El telón de fondo de la actual crisis del bloque empresarial y de la insurgencia de los movimientos sociales es el carácter de enclave exportador de la economía boliviana⁵. El hecho de que la modernidad industrial sólo se haga presente en pequeñas islas rodeadas de un mar de informalidad y una economía campesina semimercantil limita la formación de un mercado interno capaz de sostener una actividad empresarial dotada de valor añadido, aunque se reduzcan los costes salariales. La vulnerabilidad [de la economía boliviana] frente a las fluctuaciones de los precios mundiales es una característica endémica. En este sentido podemos decir que la crisis de *longue durée* del Estado es el correlato político de una crisis económica del modelo exportador, también de larga duración, incapaz de retener productivamente los excedentes y, por lo tanto, de invertir el capital necesario para el desarrollo nacional. Así, las propuestas de los Comités Cívicos de Santa Cruz en favor de la autonomía departamental, renovadas cada vez que se mantiene una discusión sobre la redistribución de los ingresos de los hidrocarburos, o las demandas de autogobierno de las comunidades indígenas, no sólo cuestionan la configuración del poder estatal, sino que también revelan la crisis subyacente del orden económico establecido.

Instituciones políticas

Desde 1985 los partidos políticos de la elite boliviana han pretendido, con el apoyo autoritario del Estado, sustituir al viejo régimen de mediación política ejercida por los sindicatos, que vinculaba la herencia comunal de las sociedades tradicionales con las acciones colectivas de los obreros en las grandes empresas. El sistema de partidos fue definido preceptivamente por la muy sesgada Constitución boliviana como el mecanismo mediante el que debía llevarse a cabo el ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, está claro que los antiguos grupos partidarios no han llegado a convertirse en auténticos vehículos de mediación política, capaces de canalizar las reivindicaciones sociales hacia el Estado. Siguen siendo, sobre todo, redes familiares y empresariales a través de las cuales los miembros de la elite pueden

⁴ La empresa pública brasileña Petrobras es el principal comprador de gas natural boliviano, junto con la española Repsol [N. de la NLR.]

⁵ José VALENZUELA, *¿Qué es un patrón de acumulación?*, Ciudad de México, 1990.

competir por el acceso a la Administración del Estado como si se tratara de una posesión patrimonial; las conexiones con las masas de votantes se organizan en gran medida en torno a vínculos clientelistas y lazos de privilegio⁶.

Con la destrucción de la base sindical de la ciudadanía boliviana y una nueva forma de participación electoral apenas perceptible, a finales de siglo comenzaron a surgir otras formas populares de mediación política. Los movimientos sociales, viejos y nuevos, han establecido sus propias formas de deliberación, asambleas de masas y acción colectiva. En la Bolivia de hoy hay, por tanto, dos tipos de sistema institucional. En el Chapare, los Yungas y el norte de Potosí, las formas comunales prevalecen no sólo sobre las organizaciones partidarias, sino también sobre las propias instituciones estatales, hasta el punto de que los alcaldes, corregidores y subprefectos están de hecho subordinados a las confederaciones campesinas. En el caso del altiplano septentrional, durante los últimos años han desaparecido varias subprefecturas y puestos de policía, creándose en las capitales de provincia una «policía comunal» para preservar el orden público en nombre de las federaciones campesinas. Durante los bloqueos que acompañaron las protestas antiprivatización de 2003-2005, cientos de comunidades del altiplano constituyeron lo que llamaban el «gran cuartel indígena» de Q'alachaca, y una confederación *ad hoc* de pueblos y *ayllus* militantes.

El concepto de «Estado aparente» del teórico boliviano René Zavaleta parece aquí muy pertinente. Debido a la diversidad social y civilizacional del país, grandes franjas del territorio y sectores de la población no han interiorizado o permanecen ajenas a la disciplina del proceso de trabajo capitalista; reivindican otras temporalidades, otros sistemas de autoridad, y sostienen proyectos y valores colectivos distintos a los que ofrece el Estado boliviano⁷. Mediante las luchas políticas y económicas de los últimos cinco años, esas capas han experimentado un proceso de creciente consolidación institucional, en algunos casos permanente (territorios agrarios indígenas muy politizados) y en otros esporádica (áreas urbanas de Cochabamba, La Paz y El Alto). Como consecuencia, el Estado neoliberal se ha visto confrontado con la fragmentación del orden institucional y una pérdida de autoridad para gobernar. El sistema alternativo, anclado en el mundo de la experiencia indígena marginada por el desigual proceso de modernización en Bolivia, desafía la secular aspiración del Estado a una modernidad basada en textos e instituciones que no son respetados ni siquiera por las elites que los enarbolan, que por su parte nunca han abandonado los métodos de política señorial y patrimonial. La corrupción generalizada en el aparato estatal no es otra cosa que la representación

⁶ P. CHAVES, *Los límites estructurales de los partidos de poder como estructuras de mediación democrática. Acción Democrática Nacionalista*, tesis doctoral en sociología, La Paz, 2000.

⁷ Luis TAPIA, *La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad*, La Paz, 2002.

modernizada de esos hábitos mediante los que las elites en el poder se apoderan de las funciones estatales y las reproducen.

La cultura política y las instituciones liberal-capitalistas que están siendo asaltadas por los movimientos sociales y puestas en la picota por el comportamiento real de las elites en el poder presuponen la individuación de la sociedad: la disolución de las lealtades tradicionales, de las relaciones señoriales y de los sistemas productivos no industriales. En Bolivia estos procesos han afectado como mucho a una tercera parte de la población; el Estado boliviano, no obstante, incluida su actual variante «neoliberal», ha construido, en una especie de esquizofrenia política, instituciones y regímenes normativos que no guardan correspondencia con la realidad «múltiple» de nuestra sociedad, la cual en su mayoría estructural no es industrial ni individualista. El efecto de los movimientos sociales indígenas y plebeyos, que en términos habermasianos insisten en la acción «normativa» por encima de la «comunicativa», ponen así en cuestión la validez de las instituciones del Estado republicano, que ofrecen un mero simulacro de modernidad, en una sociedad a la que todavía le faltan las bases estructurales y materiales sobre las que se podría basar tal modernidad.

Creencias movilizadoras

Desde 1985 los proyectos ideológicos ofrecidos a la población boliviana han sido el libre mercado, la privatización, la gobernabilidad y la democracia representativa. Todas esas propuestas eran ilusorias pero bien fundadas, ya que, aunque nunca se materializaron en un sentido sustancial, suscitaron un realineamiento de acciones y creencias en una sociedad que imaginaba que, mediante ellas y pese a los sacrificios que exigían, resultaría posible alcanzar el bienestar, la modernidad y el reconocimiento social. Las clases urbanas altas, medias y subalternas –tras haber abandonado estas últimas toda esperanza de protección por parte del Estado y los sindicatos tradicionales–, veían en esta oferta una nueva vía a la estabilidad y la mejora social.

En 2000 la distancia entre expectativas y realidades iba empujando al conflicto con la autoridad estatal a una población decepcionada. La promesa de modernidad sólo había dado lugar a una explotación intensificada y a un incremento del trabajo informal (del 55 al 68 por 100 en veinte años); la de mejora social, a una mayor concentración de la riqueza y a un refinamiento de las formas de discriminación étnica. La privatización, especialmente la de los hidrocarburos, lejos de expandir el mercado interno, ha provocado una fuga acelerada de los beneficios a manos extranjeras. Esta discrepancia entre los planes oficiales y la realidad vivida ha hecho a grandes sectores de la población muy receptivos a nuevas lealtades y creencias movilizadoras. Entre éstas están las reivindicaciones etnonacionales de las masas indígenas, que han dado lugar a una especie de nacionalismo indígena en la población aimara del altiplano; la recuperación por el Estado de los recursos públicos privatizados –agua, hidrocarburos–; y

la ampliación de la democracia y la participación social mediante el ejercicio de prácticas políticas no liberales de tipo colectivo y tradicional (comunidad indígena, sindicatos, etc.). Estas convicciones están desplazando activamente a las lealtades hacia la ideología liberal y privatizadora del Estado.

Se podría decir que el Estado boliviano ha perdido su monopolio sobre el capital de reconocimiento y que estamos atravesando un periodo de transición en las estructuras de lealtad. Un rasgo notable de los nuevos movimientos es que cuestionan tanto los discursos de la modernidad neoliberal como las certezas en que se basa el Estado republicano: que existe una diferencia intrínseca entre indígenas y mestizos, y que los indios no son capaces de gobernar el país. El hecho de que los indios, acostumbrados a dar sus votos a los «míst'is» (mestizos), hayan votado normalmente durante los últimos años por los líderes indígenas emergentes, indica un cambio en las estructuras simbólicas de una sociedad profundamente colonial y racializada. Para las fuerzas sociales indígenas la consecución de una hegemonía urbana se plantea como una tarea estratégica central, porque es ahí donde su identidad se enfrenta a su propia amalgama o disolución frente a la composición –ambigua– de las identidades mestizas, tanto de la elite como del pueblo.

Así pues, en Bolivia se han deteriorado rápidamente los pilares del modelo «neoliberal» y del Estado republicano. Esta conjunción de crisis explica no sólo la naturaleza radical del conflicto político durante los últimos cinco años, sino también su complejidad e irresolución. Tales crisis no pueden durar mucho tiempo, porque ninguna sociedad puede resistir largos periodos de vacío o incertidumbre política. Más pronto o más tarde se producirá una recomposición duradera de fuerzas, creencias e instituciones que inaugurará un nuevo periodo de estabilidad del Estado. La cuestión es qué tipo de Estado saldrá de esa mutación. Podría haber un aumento de la represión que condujera a la introducción de un Estado «neoliberal-autoritario» como nueva forma política, lo que quizá resolvería la crisis de *courte durée*, pero no la de *longue durée*, cuyos problemas se volverían a manifestar pronto de nuevo; o podría darse, en cambio, una apertura de nuevos espacios para el ejercicio de derechos democráticos (reformas políticas multiculturales, instituciones que combinaran lo comunitario-indígena con lo liberal) y una redistribución económica (un papel productivo para el Estado, autogestión, etc.), capaces de resolver ambas dimensiones de la crisis. En este último escenario, una resolución democrática de la crisis del Estado neoliberal tendrá que suponer una resolución multicultural simultánea de la crisis del Estado republicano colonial.

Las hegemonías, argumenta Zavaleta, pueden fatigarse: hay momentos en que el Estado deja de ser irresistible, cuando la población abandona los marcos ideológicos que llevaron a aceptar como deseable el orden social promovido por la elite. La sublevación de octubre de 2003 fue la máxima expresión del disenso de las masas con respecto al Estado «neolibe-

ral-patrimonial» y, por lo tanto, del agotamiento de su forma de hegemonía⁸. Si cada crisis del Estado suele atravesar por cuatro fases –manifestación de la crisis; transición o caos sistémico; surgimiento conflictivo de un nuevo principio de orden estatal; consolidación del nuevo Estado–, en octubre de 2003 la sublevación de cientos de miles de indios y masas urbanas en las ciudades de La Paz y El Alto, que culminó en la huida del presidente Sánchez de Lozada, marcó inexorablemente la entrada del Estado boliviano en la fase de transición. La aceptación inicial de la sucesión constitucional del vicepresidente Carlos Mesa se debió no tanto a la deferencia hacia el parlamentarismo, como a la adhesión popular al viejo prejuicio de la personalización del poder, la creencia de que un cambio de personal es ya de por sí un cambio de régimen. Pero también hubo en el abandono de las instituciones liberal-democráticas cierta lucidez histórica con respecto a las posteriores consecuencias implícitas, dada la correlación de fuerzas existente.

No obstante, si bien no puede haber dominación del Estado sin el consentimiento de los dominados –progresivamente erosionado en Bolivia desde los bloqueos de 2000–, tampoco puede haber un éxito de la oposición sin la capacidad de postular un orden alternativo. Esto es precisamente lo que descubrieron los insurgentes: que podían paralizar el Estado con sus bloqueos pero eran incapaces de plantear un proyecto alternativo y legítimo de poder. De ahí la ambigua y confusa tregua del periodo Mesa (2003-2005), durante el que ese distinguido periodista y locutor intentó canalizar el programa mínimo de los insurgentes (dimisión de Sánchez de Lozada, Asamblea Constituyente, nueva ley de hidrocarburos), sin modificar apenas la maquinaria gubernamental de reformas neoliberales.

Épocas revolucionarias

Fue Marx quien propuso el concepto de «época revolucionaria» para entender periodos históricos extraordinarios de cambio político acelerado –desplazamientos repentinos en la posición y poder de las fuerzas sociales, repetidas crisis estatales, recomposición de las identidades colectivas, oleadas repetidas de rebelión social–, separados por periodos de estabilidad relativa durante los cuales la modificación, parcial o total, de las estructuras generales de dominio político permanece no obstante pendiente.

Una época revolucionaria es un periodo relativamente largo, de varios meses o años, de intensa actividad política en la que (a) sectores, bloques o clases sociales anteriormente apáticos o tolerantes hacia los que ejercen

⁸ Las protestas contra el plan del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar el gas a través de Chile (un enemigo nacional desde que arrebató a Bolivia el acceso al mar en la Guerra del Pacífico de 1879-1883), en lugar de procesarlo en el país, se incrementaron hasta convertirse en una insurrección a gran escala en La Paz y El Alto en octubre de 2003, que concluyó con la huida y el exilio del presidente [N. de la NLR].

el poder desafían abiertamente su autoridad y reclaman derechos o realizan peticiones colectivas mediante movilizaciones directas (coordinadoras del gas y del agua, organizaciones vecinales, indígenas, cocaleros, pequeños agricultores); (b) algunos o todos esos sectores movilizados plantean activamente la necesidad de tomar el poder estatal (MAS, CSUTCB, COB)⁹; (c) se produce una adhesión cada vez mayor a esas propuestas por parte de amplios sectores de la población (cientos de miles de personas movilizadas en la guerra del agua, contra el aumento de impuestos, en la guerra del gas, en las elecciones en apoyo a los candidatos indios...), mientras la distinción entre gobernantes y gobernados comienza a disolverse, debido a la creciente participación de las masas en los asuntos políticos; y (d) las clases dominantes son incapaces de neutralizar esas aspiraciones políticas, lo que da lugar a una polarización del país en varias «soberanías múltiples» que fragmentan el orden social (la pérdida del «principio de autoridad» desde abril de 2000 hasta ahora)¹⁰.

En las épocas revolucionarias las sociedades se fragmentan en coaliciones sociales con propuestas, discursos, líderes y programas de poder político antagonistas e incompatibles entre sí. Esto da lugar a «ciclos de protesta»¹¹, oleadas de movilizaciones seguidas por retiradas, que sirven para demostrar la debilidad de los que ejercen el poder (Banzer en abril y octubre de 2000 y junio de 2001; Quiroga en enero de 2002; Sánchez de Lozada en febrero y octubre de 2003). Tales protestas también sirven para «infectar»¹² a otros sectores o incitarlos a utilizar la movilización de masas como mecanismo para defender sus reivindicaciones (profesores, jubilados, campesinos sin tierra, estudiantes). Al mismo tiempo, esas movilizaciones fracturan y desestabilizan la coalición social del bloque dominante, dando lugar a reacciones en contra (el llamado «creciente» cívico-político-empresarial en el este del país), que a su vez produce otra oleada de movilizaciones, generando un proceso de inestabilidad y turbulencia política que se retroalimenta. No toda época revolucionaria culmina en una revolución, entendida como un cambio de las fuerzas sociales en el poder, que debería ir precedida por una situación insurreccional. Hay épocas revolucionarias que conducen a una restauración del antiguo régimen (golpe de Estado), o a una modificación negociada y pacífica del sistema político mediante la incorporación parcial o sustancial al bloque de poder de los insurgentes y sus propuestas de cambio.

⁹ Movimiento Al Socialismo: organización política dirigida por el líder campesino indígena Evo Morales. Más que un partido, se trata de una coalición electoral de varios movimientos sociales urbanos y rurales. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia: organización de comunidades campesinas e indígenas, fundada en 1979 y dirigida por Felipe Quispe.

¹⁰ Charles TILLY, *European Revolutions, 1492-1992*, Oxford, 1993.

¹¹ Sidney TARROW, *Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics*, Cambridge, 1994.

¹² Anthony OBERSCHALL, *Social Movements. Ideologies, Interests and Identities*, New Brunswick, 1993.

El periodo político actual en Bolivia puede caracterizarse, pues, como una época revolucionaria. Desde 2000 se ha producido una creciente incorporación de amplios sectores sociales a la toma de decisiones políticas (agua, tierra, gas, Asamblea Constituyente) a través de sus organizaciones sindicales, comunales, vecinales o gremiales, así como un continuo debilitamiento de la autoridad gubernamental, una fragmentación de la soberanía estatal y una creciente polarización del país en dos bloques sociales que defienden proyectos radicalmente distintos y opuestos para la economía y el Estado.

En un polo, el núcleo fundamental es el movimiento indígena, de composición tanto rural (campesina) como urbana (obrero); representa claramente un proyecto político y cultural para el país diferente de cualquiera de los que hayan existido anteriormente. El programa económico de ese polo se centra en el mercado interno, tomando como eje la comunidad campesina, el artesanado urbano y la actividad microempresarial, un papel revitalizado para el Estado como fuerza productiva industrializadora y un papel central para la mayoría indígena en la conducción del nuevo Estado. En el otro polo está el bloque de las empresas financieras, petrolíferas y de exportaciones agrícolas (un sector en auge), que han desempeñado el papel más dinámico en las áreas liberalizadas de la economía. Ese bloque tiene una idea clara de cómo se debería relacionar Bolivia con los mercados externos y del papel de la inversión extranjera, y favorece la subordinación del Estado a la empresa privada y la preservación o restauración del viejo sistema político. Atrincherado en las regiones orientales y surorientales del país, lejos del alcance organizativo actual de los movimientos sociales, despliega un discurso abiertamente racializado.

Esta polaridad política se ve estructurada además por tres fisuras subyacentes: etno-cultural (*taras*-indígenas / *qaras-gringos*), de clase (obreros / empresarios) y regional (oeste andino / creciente amazónico). En el caso del polo de «izquierdas», la identidad movilizadora es predominantemente etno-cultural, y en torno a ella la identidad obrera se ha disuelto (en un nuevo tipo de proletariado indígena) o complementa la dirección indígena a un nivel secundario. Para el polo de «derechas» la identidad movilizadora es ante todo de carácter regional; de ahí la importancia para esas fuerzas conservadoras de los comités cívicos, que agitan en favor de la autonomía regional.

Esta polarización ha llevado a una disociación entre dominación económica y dominación política, creando un periodo de inestabilidad, ya que los componentes del poder están divididos en dos zonas diferentes, ninguna de las cuales tiene la posibilidad, al menos de inmediato, de desplazar a la otra. El poder económico se ha desplazado de oeste a este (reforzado por la inversión extranjera en hidrocarburos, servicios, agroindustrias), mientras que el poder de movilización sociopolítica se ha fortalecido en el oeste del país, dando lugar a una nueva incertidumbre geográfica para el Estado. Lo más interesante en la «paradoja de octubre», el

periodo abierto por la insurrección que derrocó a Sánchez de Lozada, es que esa separación regional expresa simultáneamente una confrontación de etnias y clases muy diferenciadas: empresarios en el este (Santa Cruz, Beni, Tarija), y sectores indígenas y de masas en el oeste (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro), ambos a la espera de abalanzarse sobre una Administración estatal que ya no expresa, en términos territoriales, sociales y culturales, la nueva configuración económica y política de la sociedad boliviana. Ciertamente es que en cada rincón de Bolivia hay hombres de negocios, indígenas, mestizos, obreros y campesinos; pero los discursos en ascenso y las identidades articuladas dentro de cada región se diferencian por esas raíces de clase, étnicas y territoriales.

En conjunto, el mapa de las fuerzas sociopolíticas en Bolivia muestra un campo muy politizado, con tendencias en ambos bandos que propugnan soluciones de fuerza, bien mediante un golpe de Estado (MNR¹³) o una insurrección (CSUTCB / COB), o mediante la resolución electoral, vía una restauración del antiguo régimen (ADN¹⁴) o su transformación progresiva (MAS). Ninguna de esas tendencias ha conseguido todavía construir un bloque mayoritario con respecto a las demás, y menos aún sobre los sectores de la población que serían indispensables para ejercer un liderazgo social capaz de mantener el poder estatal en sus manos durante un periodo largo.

Desde el punto de vista de los movimientos sociales y sus perspectivas de una transformación indígena-popular del Estado, hay dos alternativas: una vía de cambio institucional gradual por medios electorales liderada por Evo Morales, y una vía insurreccional que pretende la transformación revolucionaria del Estado. La primera exigiría la construcción de un bloque electoral en torno a Morales, negociado con otros líderes y movimientos sociales, lo bastante fuerte como para generar un polo popular e indígena unificado, con capacidad para gobernar. El amplio respaldo social necesario requeriría propuestas de cambio lo bastante enérgicas como para atraer a los sectores urbanos –clase media, sectores populares en ascenso social, e incluso capas de empresarios vinculados al mercado interno– que hasta el presente se muestran renuentes a aceptar una solución gubernamental indígena, y sin cuyo apoyo un eventual triunfo electoral indígena se vería bloqueado.

Las dos vías, electoral e insurreccional, no son necesariamente incompatibles; podrían resultar complementarias. Aun así, tanto en una como

¹³ Movimiento Nacionalista Revolucionario: partido nacionalista que encabezó la revolución popular de 1952 y que durante la década de 1980 impulsó las reformas liberales del Consenso de Washington.

¹⁴ Acción Democrática Nacionalista: partido fundado en 1979 por el dictador Hugo Banzer y que él dirigió en subsiguientes elecciones, obteniendo la presidencia en 1997 (en agosto de 2001 dimitió debido al cáncer que padecía y fue sustituido hasta las elecciones de agosto de 2002 por su vicepresidente Jorge Fernando «Tuto» Quiroga).

en otra el polo indígena-popular debería consolidar su hegemonía, ofreciendo liderazgo intelectual y moral a la mayoría social del país. No habrá un triunfo electoral ni una insurrección victoriosa sin un trabajo amplio y paciente para unificar los movimientos sociales y un proceso práctico de educación para materializar el liderazgo político, moral, cultural y organizativo de esas fuerzas sobre las capas medias y populares del país.